

## RUMANÍA

### COMENTARIO GENERAL

#### Situación política

Los retos políticos a los que se enfrenta Rumanía en el año que empieza no son de gran relieve. Después de las elecciones locales y legislativas de 2012 y las europarlamentarias y presidenciales de 2014, en 2015 se organizarán solamente elecciones parciales. Estarán en juego mandatos de senadores y diputados que han quedado vacantes a raíz de renunciaciones, decesos, o condenas penales.

Diezmada por los fiscales que han detenido a un número masivo de alcaldes de municipios y presidentes de consejos departamentales, la administración local renovará también sus filas en los meses que siguen, de manera que el escenario político será dominado por aclaraciones, traslados y arreglos de cuentas en el seno de los partidos.

El PSD, el mayor partido, y desde hace dos años el principal socio de Gobierno, afronta también los mayores problemas, después de la derrota del pasado mes de noviembre del Primer Ministro Victor Ponta en las elecciones presidenciales. Según sus propias declaraciones, Ponta no parece estar decidido a presentar su candidatura al Congreso extraordinario del próximo mes de marzo en calidad de propio sucesor a la cabeza del partido.

Tampoco el PC, uno de los socios menores del PSD en el gobierno, ha empezado el año bajo auspicios favorables, tras estallar en público las discordias entre su Presidente y titular de Agricultura, Daniel Constantin y el fundador de esta formación, Dan Voiculescu, condenado a 10 años de prisión por actos de cohecho. La prensa especula que la ruptura entre los dos podría provocar una falla también en el interior del partido, entre aquellos que los observadores denominan los nostálgicos de la marca Voiculescu y los que apuestan por el joven Constantin.

Parece ser que tampoco la derecha, desde la oposición, sabe todavía gestionar el desenlace -para ella feliz- del escrutinio presidencial, ganado por el ex líder liberal, Klaus Johannis. Este ha sido ya acusado, entre bastidores, de haber impuesto en su lugar, a la cabeza del PNL a su favorita, la joven e inexperta Alina Gorghiu, en detrimento del viejo combatiente, Ludovic Orban. Además, los liberales tienen que gestionar en 2015, la fusión, entre un gran partido de derecha, afiliado al PPE, con los liberal-demócratas, con los cuales, a lo largo de 25 años de democracia post comunista, han mantenido más bien relaciones de rivalidad feroz que de colaboración fraternal.

Finalmente, 2015 debería ser el año de la consolidación, o todo lo contrario, de la desaparición política de dos formaciones nuevas. El Partido Liberal Reformador, socio de Gobierno, encabezado por el ex primer ministro, Calin Popescu Tariceanu, y el Partido Movimiento Popular, en la oposición, que sueña con ser liderado por el antiguo Jefe de Estado, Traian Basescu, podrán hacer constar si sus líderes siguen contando algo desde el punto de vista político.

Uno de los temas en el debate político sigue siendo el de las "migraciones políticas" que había sido objeto de una controvertida ordenanza de urgencia dictada en septiembre de 2014, dos meses antes de las elecciones presidenciales, por el Gobierno Ponta. Aprobada posteriormente por el Parlamento, dicha ordenanza permitía a los responsables políticos locales cambiar de partido sin perder su mandato.

Esa ordenanza era no sólo necesaria sino también obligatoria, según explicaba el Primer Ministro, porque la administración local estaba afectada por los cambios en el escenario político. Nos encontramos, decía Ponta, en un callejón sin salida después de que los liberales se hubieran retirado de la USL, la alianza de centro-izquierda que había ganado categóricamente las elecciones legislativas en 2012.

Como era de esperar, el partido del Primer Ministro, el PSD, fue el gran beneficiario de esta ordenanza, ya que muchos responsables locales se trasladaron a este partido. Por su parte, la oposición consideró que esa ordenanza sólo servía para ayudar a Ponta a ganar las elecciones, lo que sin embargo no ocurrió, y al mismo tiempo a potenciar la influencia del PSD en el territorio, donde la presencia sólida de la oposición creaba grandes problemas.

No obstante, en diciembre el Tribunal Constitucional afirmó la inconstitucionalidad de la ordenanza. Según explicaba el Tribunal, la constitución o la ruptura de las alianzas políticas forman parte del ejercicio democrático natural y por lo tanto no pueden justificar medidas que directa y brutalmente cambian la configuración política de las autoridades de la administración pública local y alteran la voluntad del electorado. El Tribunal sostiene que la inconstitucionalidad de una ordenanza de urgencia no puede ser eliminada por la aprobación del Parlamento que, según la ley, debe rechazarla.

Ahora queda en tela de juicio el porvenir de los responsables que se aprovecharon de esa ordenanza. Si el deseo de la oposición se hace realidad, entonces todos esos responsables perderán su mandato. En esa situación, centenares de escaños de la administración local quedarán vacantes y será necesario realizar elecciones anticipadas de ámbito nacional. Eso sería algo nuevo en la democracia rumana, ya que hasta ahora solo se han organizado elecciones anticipadas locales o legislativas de poca envergadura.

Las prioridades de la mayoría parlamentaria dominada por los socialdemócratas son una nueva agenda de trabajo del legislativo y un mejor diálogo con el poder ejecutivo. El primer ministro ha prometido presentar en el pleno, al principio de cada semana, los objetivos del Gobierno. Tanto el Gobierno de izquierda como la oposición, denominada genéricamente liberal, una vez puestos en marcha los procedimientos de fusión de los nacional-liberales y los demócrata-liberales en un nuevo Partido Nacional Liberal, prometen levantar la inmunidad parlamentaria de los responsables implicados en casos de corrupción.

El diputado Tinel Gheorghe ha declarado que los liberales insistirán en el hecho de que pierdan el mandato los responsables locales que cambiaron en otoño de partido aprovechando una ordenanza del Gobierno que el Tribunal Constitucional invalidó posteriormente. Asimismo, el Partido Social Demócrata y el Partido Nacional Liberal tienen otro objetivo común: modificar la legislación electoral y, posiblemente, en el caso del Parlamento, volver al voto por listas en vez de usar el voto uninominal, que fue un verdadero fracaso. Existen diferencias de opinión respecto a la elección de los alcaldes.

En este caso, los socialdemócratas desean que se organice una sola vuelta, mientras que los liberales abogan por dos. Casi todos los analistas políticos consideran muy ambicioso el objetivo de los liberales, que desean cambiar en esta sesión parlamentaria la mayoría del Senado y de la Cámara de los Diputados, para poder derribar el gabinete de Ponta a través de una moción de censura. Los responsables incluirán en la agenda legislativa algunas enmiendas constitucionales, un nuevo código fiscal y la ley de insolvencia para las personas físicas.

Será un período difícil y afectada por la impopularidad del Parlamento de Bucarest, considerado ineficiente y costoso, sobre todo porque, después de las elecciones legislativas de 2012, el número de parlamentarios aumentó a 588, aunque se ha reducido entre tanto debido a las investigaciones anticorrupción. Lo ha admitido incluso el presidente de la Cámara de los Diputados, el socialdemócrata Valeriu Zgonea, quien ha advertido que la imagen de la institución se ha visto afectada, y sus miembros son percibidos como “ladrones” y “corruptos”. Zgonea ha añadido que esto es injusto y desalentador para numerosos parlamentarios que trabajan seriamente y cumplen su papel en el Legislativo.

En cuanto a la política exterior de Rumanía, sus principales líneas han sido presentadas por el presidente Klaus Johannis durante su primer encuentro con los diplomáticos extranjeros acreditados en Bucarest. En su discurso, el jefe del Estado ha evidenciado que la adhesión del país al área comunitaria de libre circulación y la adopción del euro representan los objetivos centrales. Johannis ha afirmado que Rumanía cumple con los criterios de adhesión al espacio de Schengen y que los socios europeos tienen que ser justos en sus evaluaciones y en la aplicación de las reglas y no cambiar en función de unos intereses pasajeros.

La asociación estratégica de EEUU constituye un punto de referencia fundamental de la política exterior rumana, ha declarado el presidente Johannis al pronunciarse a favor de la continuación dinámica del diálogo político y la colaboración con Washington. Por otra parte, ha subrayado que las amenazas contra la seguridad de la región del Mar Negro aumenta el papel estratégico de Rumanía en la promoción de un clima de paz y seguridad en la frontera oriental de la UE y la OTAN. Johannis ha insistido en el hecho de que la UE representa la más fuerte garantía de paz y estabilidad y ha abogado por la consolidación de la capacidad de previsión de la Alianza Noratlántica, teniendo en cuenta la crisis de Ucrania y la modificación permanente de la situación de seguridad.

Con respecto a las relaciones de Rumanía con la Federación Rusa, Johannis ha considerado que éstas se ven ensombrecidas por la crisis ucraniana y su vuelta al estado del diálogo constructivo depende de cómo Moscú observe los principios del derecho internacional. El presidente de Rumanía ha reafirmado el apoyo concedido a la República de Moldavia, a Ucrania y a Georgia durante su trayecto hacia Europa. Otro objetivo de Rumanía es el de recuperar y diversificar las relaciones, especialmente las económicas, con los estados de la zona de Asia y el Pacífico. Johannis se ha pronunciado también a favor de la continuación y diversificación de las relaciones con China, de la consolidación de la asociación estratégica con Corea del Sur y Japón así como de la puesta en marcha de la colaboración ampliada con India.

La política exterior de Rumanía será eficaz y creativa y corresponderá a la dinámica acelerada de la región, ha añadido el presidente. Este ha concluido que la asunción de la presidencia del Consejo de la UE en 2019 por parte de Rumanía, representa una responsabilidad en aras de la cual se tienen que elaborar planes sólidos en el beneficio común de todos los estados miembros de la Unión.

### **Situación económica y social**

Los ámbitos económico y fiscal junto a las medidas sociales, centrarán la atención del Ejecutivo de Bucarest en la actual sesión legislativa, que ha comenzado este mes. El Premier Ponta ha anunciado 12 prioridades, entre las que están el mantenimiento de las medidas de equilibrio social centradas en el crecimiento de las pensiones, de los subsidios de apoyo para los niños procedentes de familias con ingresos reducidos y de las indemnizaciones para las personas discapacitadas.

La ley de quiebra personal, una nueva legislación respecto a las regalías, nuevos programas en los ámbitos de la educación y de la sanidad están también en la lista del Gobierno. Estas prioridades parten de la premisa de que existirá una estabilidad y una colaboración entre el Parlamento y el Gobierno. Éstas han hecho que en los últimos tres años se registrara crecimiento económico, una reducción del desempleo y una inflación del 1% el año pasado, según ha subrayado Victor Ponta en “La hora del primer ministro”, una iniciativa en la que el jefe del Ejecutivo presenta las prioridades legislativas al principio de cada mes, en la Cámara de los Diputados.

Según el Primer Ministro, una parte significativa del crecimiento económico llegaría a los ciudadanos a través de una distribución equitativa y manteniendo los equilibrios sociales. El Gobierno presentará al Parlamento el nuevo proyecto del Código Fiscal y de Procedimiento Fiscal, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2016 y que tiene por objetivo crear una legislación mucho más clara y mucho más previsible en un ámbito fundamental, el de la fiscalidad. Entre las medidas que los responsables tendrán en cuenta están la de mantener el bajo nivel de la contribución al sistema de seguros sociales, del IVA aplicado al pan, la cuota única, la eliminación de los impuestos sobre el beneficio reinvertido y la creación de las condiciones necesarias para combatir la evasión fiscal, la prioridad más importante que ha anunciado el primer ministro.

En el ámbito sanitario, Ponta confía en que el objetivo del programa de las tarjetas sanitarias, es decir el de ofrecer transparencia, poner fin a los fraudes y tener una manera predecible de administrar, tenga efectos en el siguiente período. Por otro lado, el primer ministro ha destacado el apoyo del Ejecutivo al proyecto de una ley de insolvencia para las personas físicas, que asegure la protección ante las crisis financieras. “De momento, el crecimiento económico está únicamente en los papeles, no se nota en los bolsillos de los rumanos”, ha afirmado el líder del grupo del Partido Nacional Liberal en la oposición. Ludovic Orban ha criticado las decisiones del Gobierno, acusándolo de que ha preferido gobernar mediante las ordenanzas de urgencia y no a través de debates transparentes en el Parlamento. En su opinión, además de las medidas económicas y sociales, el Ejecutivo debe centrarse también en el nuevo código electoral y en la modificación de la Constitución.